

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO:	11001 33 35 029 2022 00277 00
DEMANDANTE:	DARWIN ESTIVEN CHILITO MUÑOZ
DEMANDADO:	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede el Despacho a emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial del señor Darwin Estiven Chilito Muñoz, consistente en suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo contenido en la publicación en el perfil SIMO del demandante, referente a los resultados de la valoración médica obtenida en el proceso de selección de la Convocatoria 1356, con la cual fue excluido del concurso.

De la solicitud de medida cautelar

La parte demandante considera que la solicitud resulta procedente por cuanto el acto administrativo acusado vulnera las disposiciones invocadas en la demanda, especialmente las de carácter constitucional, como son: el debido proceso, la igualdad, derecho de petición y los principios de confianza legítima y el mérito; recalca que, la decisión favorable de la medida cautelar no afecta ni a la CNSC no a ningún individuo en particular.

Argumentos de la CNSC., respecto de la solicitud de medida cautelar.

Mediante auto del 6 de octubre de 2022, se corrió traslado por el término de cinco días a la contraparte, quien a través de memorial radicado en tiempo emitió pronunciamiento.

El apoderado judicial de la entidad demandada, indicó que la presente solicitud de suspensión provisional, es improcedente, toda vez que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA., pues la parte demandante, no demostró la efectiva vulneración de las normas en las que sustenta la demanda.

Afirma que no hay lugar a decretar la suspensión de la valoración médica, publicada el 12 de noviembre de 2021 en la plataforma SIMO, así como tampoco a la respuesta dada por la Universidad Libre a la reclamación del actor, toda vez que, la decisión de excluir al inscrito por no cumplir con el requisito dentro de la prueba de valoración médica exigido por la OPEC 129614, pues ese resultado tiene fundamento en las normas que regulan el concurso de méritos del Acuerdo CNSC – 20191000009546 del 20 de diciembre de 2019, modificado por el Acuerdo No. 0239 del 7 de julio de 2020 y demás normas que rigen el concurso.

Tampoco fue demostrada la causación de algún perjuicio injustificado o de un daño irreparable, dado que, no presenta argumentos ni razones de hecho o derecho, de cómo la actuación de esta Comisión Nacional en desarrollo de la Convocatoria 1356 de 2019, INPEC, con los resultados de la prueba de resultados médicos del participante genera un daño irreparable, o que la misma se hizo con violación al debido proceso, igualdad y derecho al mérito, como tampoco al derecho de petición, dado que la reclamación fue debidamente contestada por la Comisión a través de la Universidad Libre, mediante el oficio 443809536.

CONSIDERACIONES

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las medidas cautelares se constituyen en un instrumento de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. Es del caso recordar que la suspensión provisional de los actos administrativos, se encuentra prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como una medida cautelar en los siguientes términos:

“Art. 229.-En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte

debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Art. 230.-Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar, una o varias de las siguientes medidas:

(...)

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

(...)” (Subrayado fuera del texto)

Para que proceda la suspensión del acto administrativo acusado, se deben cumplir con los requisitos, oportunidad y trámite establecidos en el artículo 231 de C.P.A.C.A, así:

“Art. 231.-Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

(...)

Caución Art. 232.-(...)No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la

defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública."

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se le otorga al Juez la facultad de establecer la procedencia de la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando analizado el acto administrativo acusado y las pruebas allegadas, se evidencie la vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda.

En ese sentido, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, es una excepción a la presunción de legalidad que ampara las decisiones de la administración, en los eventos de infringir las normas superiores en que deben fundarse.

CASO CONCRETO:

En el presente caso, la medida cautelar se refiere a la suspensión del acto administrativo contenido en la publicación en el perfil SIMO del demandante, de resultados de valoración médica obtenido en el proceso de selección de la Convocatoria 1356, que concluyen con un concepto expedido por la funcionaria de la Comisión Nacional del Servicio Civil que gerencia la Convocatoria, con la exclusión del concurso del demandante.

El artículo 231 del CPACA establece los requisitos por medio de los cuales hay lugar a la procedencia de las medidas cautelares, así:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable,
- o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios."

Conforme a lo anterior, y analizando la medida cautelar solicitada, no puede concluir que se presente un perjuicio irremediable, pues no existe prueba, siquiera sumaria, que permita predicar su configuración; teniendo en cuenta que, al tratarse de un concurso de méritos, tal como lo ha establecido la H. Corte Constitucional, nos encontramos ante una mera expectativa y no ante un legítimo derecho.

"44. La valoración del perjuicio irremediable, en tanto riesgo de afectación negativa, jurídica o fáctica a un derecho fundamental exige que concurren los siguientes elementos. Por una parte, debe ser cierto, es decir que existan fundamentos empíricos que permitan concluir que el riesgo que se pretende evitar sí puede ocurrir dentro del contexto fáctico y jurídico del caso. En otros términos, debe existir plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado. Además, la certeza del riesgo debe tener una alta probabilidad de ocurrencia; no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o una simple percepción del solicitante. De la misma forma, el riesgo debe ser inminente, o sea, que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la mera expectativa ante un posible menoscabo."¹

Por otra parte, las medidas cautelares están llamadas a proceder cuando la violación invocada "surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud", al respecto, se tiene que, con la solicitud no se aportaron la totalidad de las pruebas que permitan, en este estado temprano del proceso, tener la certeza de la titularidad del derecho, aunado a que, del primer análisis entre el acto y las normas que se consideran vulneradas, no se puede

¹ T-425/19

determinar aún la violación alegada, la cual además necesita una recaudación probatoria suficiente que permita vislumbrar la existencia del derecho reclamado.

Con todo, es preciso tener en cuenta la presunción de legalidad de los actos administrativos que se demandan, toda vez que a simple vista no se observa una causal que los desvirtúe.

En ese orden de ideas, en el presente caso no se advierte que se cumpla con los requisitos que al efecto establece el artículo 231 del C.P.A.C.A., circunstancia que impone negar la solicitud de suspensión provisional solicitada.


En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo demandado, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Sebastián Aníbal Pinzón Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía 1.022.325.048 y portador de la tarjeta profesional 229.326 como apoderado judicial de la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme el poder allegado

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JFBM

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy diez (10) de febrero de 2023 a las 8:00 a.m.

SECRETARÍA

Demandante	notificacionesavancemos@gmail.com
Demandado	notificacionesjudiciales@cncs.gov.co
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
Ministerio Público	procjudadm191@procuraduria.gov.co